

# Hasta la última gota

Las narrativas que sostienen a los extractivismos

## To the last drop

Narratives sustaining extractivism

**Eduardo Gudynas**

*egudynas@ambiental.net*

Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES)

Uruguay

### Resumen

Se analiza la construcción de narrativas que promueven y legitiman los extractivismos. Se aborda un caso emblemático para el sector petrolero y se ofrecen otros ejemplos complementarios. Estas narrativas mezclan aseveraciones fácticas con premisas morales, interpretaciones con opiniones, y se invisibilizan o excluyen informaciones. Entre los elementos se cuenta aseverar que los extractivismos no tendrían impactos y que se ocurrieran podrían ser remediados, que sus efectos territoriales son acotados, que son indispensables para la economía nacional o que las corporaciones se pueden autoregular. Se insiste en una ciencia de expertos que a su vez excluye otros saberes. Se enfatizan unas ideas como se excluyen otras, y a su vez se articulan con otras narraciones políticas que les son funcionales. La discusión apela al concepto de “sentido común” elaborado por Stuart Hall a partir de Antonio Gramsci. Las alternativas se ubican en deconstruir esas narrativas y a la vez promover contranarrativas que desnuden los impactos de los extractivismos y permitan generar alternativas post-extractivistas.

**Palabras clave:** Extractivismos, Efectos derrame, Narrativas políticas, Sentido común, Postextractivismos.

### Abstract

Narratives that promote and legitimize extractivism are analyzed. A key case for the oil sector is presented along with additional examples. These narratives mix factual assertions with moral premises, interpretations with opinions, and some information may be excluded or make invisible. These include elements like statements on the zero impact or full remediation of extractivism, small territorial effects, economic demands, or confidence on corporate self-regulation. These narratives insist in expert based sciences that exclude other knowledge. Some ideas are emphasized while others are excluded, and in turn they articulate with other political narratives that are functional to them. Discussion recovers the concept of “common sense” developed by Stuart Hall after Antonio Gramsci. The alternatives are located in deconstructing those narratives and at the same time promoting counter-narratives that expose the impacts of extractivism and allow for the generation of post-extractivism alternatives.

**Key words:** Extractivism, Spill over effects, Political narratives, Common sense, Postextractivism.

## Introducción

Es un hecho la proliferación de los llamados *extractivismos*, como el minero o petrolero, en toda América Latina. Uno de los aspectos más impactantes de esta diseminación es que a pesar de las crecientes denuncias y resistencias ciudadanas, de todos modos son defendidos por buena parte de la sociedad, por amplios sectores académicos y por casi todos los gobiernos, tanto conservadores como progresistas. Incluso no son pocos los que hablan de una “cultura” minera o petrolera en el propio país que los legitima como un tipo de desarrollo que es inevitable.

Todo esto muestra que los extractivismos atraviesan múltiples dimensiones culturales y políticas. Se asume que los extractivismos serían indispensables para cualquier variedad de desarrollo y se invisibilizan sus impactos sociales, ambientales y económicos. No hay una pre-determinación desde las posturas políticas ya que todas se vuelven extractivistas, aunque cada una a su manera.

Estos y otros abordajes indican que de una forma u otra, los extractivismos descansan sobre

una base que ha sido descrita según distintas perspectivas como política, ideológica, hegemónica, cultural e incluso como una teología. Desde allí se organizan discursos, narraciones, argumentos e incluso sensibilidades para promover y defender ese tipo de actividades.

En este artículo se abordan algunos aspectos de esa dinámica, aprovechando una particular defensa de un extractivismo específico, la explotación petrolera, ya que refleja situaciones que son muy comunes en toda América Latina<sup>1</sup>. Es un abordaje que, dicho en otras palabras, examina algunos elementos destacados en la construcción de narrativas que sustentan políticas públicas extractivistas.

<sup>1</sup> Algunas de estas ideas se adelantaron en una conferencia en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá (2018) y en un texto en el portal *Palabras al Margen*, N° 122, Bogotá (2018). Disponible en <http://palabrasalmargen.com/edicion-122/los-nudos-del-petroleo-en-colombia-ambiente-y-ciencia-politica-y-democracia/>.

## Argumentos y narrativas

La defensa de los extractivismos, como la explotación petrolera, la megaminería o la ampliación de monocultivos, puede ser analizada como *narrativas*, en el sentido de ser historias con una trama que describen situaciones y significados apelando a diversos argumentos. Estas narraciones sirven para construir y sostener distintas políticas públicas, no sólo las que promocionan distintas actividades, como puede ser entregar concesiones o subsidiar empresas, sino que brindan ideas que las legitiman.

Existen importantes antecedentes en esta perspectiva para abordar la construcción de políticas públicas. En los estudios sobre el desarrollo se ha usado la mirada de las *narrativas del desarrollo* como en Roe (1991), y en ciencias políticas se apea a las *historias causales*, como en Stone (2012); otros abordajes se ilustran en Roe (1994), Fischer (2003), Jones y McBeth (2010), Gsottbauer y van den Berg (2011), y Fischer y Hottweis (2013). Existen amplias superposiciones con los análisis sobre los discursos (como por ejemplo Roe, 1994), y que en el caso de los extractivismos tiene varios

ejemplos en el continente (tales como los aportes de Antonelli, 2014).

En los análisis de las narrativas políticas en varios casos se critican los modelos positivistas, racionalistas y supuestamente neutros, y por ello las posiciones tecnocráticas de entender las políticas públicas. Son las posturas que entienden que hay una única ciencia, que es objetiva y que ésta determina directamente cuáles deben ser las políticas públicas a seguir. En contra de esta posición prevaleciente, se reconocen a los aportes científicos como diversos, con sus propias condicionalidades culturales y políticas, muchas veces provisorios, y por lo tanto se convierten en un tipo de argumento más en la discusión pública. Algunas de esas posiciones a su vez descansan en miradas postestructuralistas (Fischer y Gottweis, 2013). En esta discusión jugaron papeles importantes varios accidentes y desastres ambientales al dejar en desnudo las limitaciones de aquel positivismo optimista (como el huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005, el megaderrame de crudo en el Golfo

de México por British Petroleum en 2010, y el desastre nuclear de Fukushima en Japón en 2011).

En la defensa de los extractivismos se evidencia un entramado de conceptos y sensibilidades con sus correspondientes instituciones, y recursos de poder, que operan para aceptarlos, sustentarlos y legitimarlos. Se organizan relatos que usan evidencias fácticas pero también incorporan representaciones simbólicas con contenidos emocionales, y buscan controlar las imágenes y las interpretaciones de los problemas (Stone, 2012). Es así que se aplican flexibilizaciones en las políticas y gestión ambiental, una contabilidad distorsionada que no incorpora los costos económicos de los impactos sociales y económicos, una institucionalidad estatal con sus ministerios de hidrocarburos o minería que los promueven, los poderes de las cámaras empresariales, subordinaciones en la construcción de planes a los pareceres de líderes sostenidos por democracias hiperdelegativas, y varios otros factores de este tipo (analizados en Gudynas, 2014). De esta manera, como en otras narraciones, los extractivismos están repletos de *historias de inocencias y culpabilidad, víctimas y opresores, sufrimiento y maldad* (Stone 2012: 228).

Para abordar en detalle esos relatos extractivistas es necesario comenzar por precisar que la estructura en las narraciones descansa en articular *argumentos*, los que son componentes que incluyen una premisa, para avanzar hacia una conclusión que se presenta como un resultado lógico. Es importante tener presente que narrativas y argumentos no son sinónimos (véase Fischer, 2003; sobre el concepto de argumento véase a Wodak, 2016).

Entre los argumentos usados en los extractivismos son muy evidentes los que corresponden a aspectos ambientales o ecológicos. Por ejemplo, se insiste en que no revisten impactos ambientales significativos. Esta postura está asociada a otras

ideas complementarias que la refuerzan, tales como confiar en soluciones científicas y tecnológicas o desvincular los impactos locales de los planetarios. Existen amplias superposiciones con argumentos en otros campos, especialmente económicos, como pueden ser señalar el papel de esas actividades como motores del crecimiento económico o confiar en la responsabilidad social empresarial. Como toda narración, se legitiman ciertos actores, claramente los llamados “expertos”, que están revestidos de autoridad, poder y recursos.

Cuando los argumentos y quienes los presentan son calificados como “científicos”, se desencadena una jerarquización de conocimientos que en la práctica termina marginalizando otras visiones ciudadanas como expresión de ignorancia o bien como posiciones que en realidad tienen intereses políticos ocultos. Se concluye, por ejemplo, que las comunidades locales no pueden votar responsablemente en una consulta sobre un proyecto extractivo ya que carecerían de la información adecuada y se dejarían llevar apenas por emociones, mitos o fantasías.

De esta manera se conforman narrativas donde se mezclan aseveraciones fácticas con premisas morales, interpretaciones con opiniones, operando como medios para persuadir y justificar, y también para imponer, unas ciertas ideas. Estas narrativas son representaciones esquemáticas, muchas veces poco rigurosas, y aunque sería apropiado no esperar mucho más de ellas, como advierte Roe (1991), el problema es que algunas son presentadas como explicaciones afirmativas y suficientes. Lo que eran generalizaciones pasan a ser exhibidas como verdades objetivas. Allí se generan legitimaciones políticas sobre conceptos claves, tales como *recurso natural* o *desarrollo* entre otros. Actúan por lo tanto apuntalando unos sistemas de creencias políticas, entendidos como conglomerados de suposiciones normativas y causales.

## El caso de la defensa extractivista

Un ejemplo de estas cuestiones, repleto de contenidos y enseñanzas, ocurrió en Colombia en 2018, con las declaraciones de un actor clave en las políticas ambientales de ese país: Brigitte Baptiste, directora del Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Bogotá<sup>2</sup>. Baptiste no sólo apoya la explotación petrolera, sino que además dice muy claramente que Colombia debe extraer *hasta la última gota*.

Sus dichos son importantes porque allí están sintetizados muchos de los argumentos que nutren los apoyos a los extractivismos. Son ideas que difícilmente aparecen todas agrupadas en una misma declaración, y por ello se está ante un resumen que se adentra en varias temáticas. Además, Baptiste tiene una destacada ubicación en la academia y dirige una prestigiosa institución de investigación en biodiversidad de Colombia, por lo que es regularmente presentada como una *experta* o *científico*. Por ello, sus declaraciones también sirven para comprender el papel de algunos actores académicos en defender a los extractivismos.

En sus declaraciones se incluyen argumentos compartidos por muchas otras personas en distintos gobiernos, buena parte de la academia, sin duda las empresas, y finalmente por varios sectores ciudadanos. Todo esto explica las ventajas de analizar sus declaraciones, sin interés en un debate personal sino como medio para un abordaje conceptual.

El análisis debe iniciarse con la afirmación de Baptiste que en Colombia la explotación petrolera tiene impactos ambientales “casi cero”. Agrega que las compañías petroleras han *asimilado muy bien* en los últimos 25-30 años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales, sobre todo en *disminuir costos sociales y ecosistémicos* de los impactos, y que su *innovación* es *impresionante*. Apoyada sobre todo en un optimismo científico y tecnológico se minimizan los impactos ambientales y desde allí estima que sus actividades son compatibles con preservar la biodiversidad. Se ofrecen argumentos complementarios que insisten en los beneficios económicos de esas actividades y los problemas en promover alternativas.

<sup>2</sup> *Me opongo a las consultas populares hechas por campañas mediáticas*. Entrevista de A. Vargas Ferro, La Silla Vacía, 10 enero 2018, disponible en <http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/me-opongo-las-consultas-populares-hechas-por-campanas-mediaticas>. Ver además, Baptiste, B. *Ciencia prefabricada*. Semana, Bogotá, 22 febrero 2018, <http://www.semana.com/opinion/articulo/la-importancia-de-hacer-buena-ciencia-columna-de-opinion-de-brigitte-baptiste/557890>

En sus declaraciones avanza en defender intensamente la necesidad de sacar hasta la última gota de petróleo, agregando que no había otras opciones. Pero además cuestiona a las consultas ciudadanas locales frente a los extractivismos en su capacidad para aceptar o rechazar proyectos extractivos. Varios de esos argumentos están a su vez respaldados con invocaciones a la legitimidad de la ciencia, implicando que las posturas ciudadanas serían no-científicas.

Un análisis debe comenzar por el argumento central en esa narrativa: la afirmación que la explotación petrolera tiene un impacto “casi cero”. Argumentos del mismo tipo se presentan, por ejemplo, para justificar la explotación de hidrocarburos en Bolivia, Brasil o Ecuador, y para el *fracking* en Argentina. Sin embargo, esos dichos carecen de apoyo científico, y por el contrario, existe una enorme cantidad de estudios y revisiones que evidencian que sí existen impactos ambientales, y que éstos son graves. No es posible aquí citar toda esa información, por motivos de espacio en primer lugar, pero de todos modos se pueden compartir algunos aspectos para dejar en claro la evidencia académica disponible.

Las actividades petroleras tienen impactos ambientales en todas sus fases, desde el inicio de exploración y prospección, pasando por la etapa de operación, y también en campos abandonados. La extracción implica caminería de acceso, perforaciones de distintos tipo, redes de oleoductos, instalaciones de bombeo, sitios de disposición de aguas, lodos y residuos, etc. (véase a Orszulik, 2016), y cada uno de esos componentes produce impactos sobre el entorno. Entre ellos se destacan la deforestación y la pérdida de la fauna y flora local<sup>3</sup>, las emisiones de compuestos peligrosos, muchos de ellos tóxicos, y varios cancerígenos<sup>4</sup>, la contaminación en el suelo y el agua, distintos efectos sobre el subsuelo, quemadas, etc. Ha recibido mucha atención la contaminación del agua en países como Ecuador y Perú<sup>5</sup>. No puede olvidarse que la llamada *agua producida* es en reali-

<sup>3</sup> Las pérdidas en biodiversidad están muy asociadas a la apertura de caminos, oleoductos o gasoductos, fragmentando los ambientes naturales, entorpeciendo la recuperación de la vegetación, permitiendo el ingreso de cazadores furtivos, tala ilegal, etc. Véanse los ejemplos para Ecuador y Argentina en Fontaine (2003), WCS (2006), McCracken y Forstner (2014) y Fiori y Zalba (2003). La sola cercanía a los pozos ya afecta la salud de los árboles en el trópico; Arellano (2015).

<sup>4</sup> Por ejemplo, para hidrocarburos Abdel-Shafy y Mansour (2016).

<sup>5</sup> Uno de los más graves casos fueron los masivos derrames petroleros en la Amazonia de Ecuador; véase EJOLT (2015).

dad un residuo peligroso o tóxico (O'Rourke y Connolly, 2003). Los volúmenes de estos y otros residuos son enormes; por ejemplo, en Estados Unidos, el sector de hidrocarburos genera más residuos líquidos y sólidos que las demás categorías sumadas (urbanos, agrícolas, mineros, etc.).

En la fase de abandono, muchos de aquellos impactos persisten en los enclaves que ya no son operados, convertidos en severos pasivos ambientales, como muestra la evidencia para Bolivia (Campanini *et al.*, 2014).

Este breve repaso atendió algunos aspectos destacados en el petróleo y gas convencional en el medio terrestre. Pero la situación es más compleja en las operaciones marinas, y todavía más con hidrocarburos no convencionales y tecnologías de fractura hidráulica.

Además de las cuestiones ambientales que se indicaron en esta sección, no debe olvidarse que también existe una abundante evidencia sobre impactos negativos sociales, tales como invasión de territorios y comunidades campesinas, deterioro en la salud pública, violación de derechos humanos, y participación en redes de corrupción (Gudynas, 2015a).

Considerando todos estos aspectos, una evaluación de los emprendimientos petroleros no puede partir desde argumentar un impacto “casi cero” o que son “amigables” con la biodiversidad. Por el contrario, tienen sustantivos efectos negativos, tanto en la estructura como en la dinámica de los sistemas ecológicos, muchos de ellos conocidos y posiblemente otros todavía no evaluados adecuadamente.

## Escalas e intensidad de los impactos

Una argumentación paralela a la que se acaba de examinar sostiene que los extractivismos petroleros o mineros tienen menores impactos ambientales por estar acotados a enclaves que cubren pequeñas superficies (como una plataforma de perforación o una mina a cielo abierto), en comparación a las actividades agrícolas o ganaderas. Ese razonamiento también ha sido defendido por Baptiste, y también es muy común en varios países.

En esta argumentación el criterio determinante es la superficie comprometida. Es correcto que el área de un enclave individual es menor a la que por ejemplo ocupa el cultivo de café en una región. Pero esta es una comparación engañosa.

Por un lado, enclaves como los mineros o petroleros tienen efectos territoriales amplificados ya que se organizan en redes donde vías de conexión vinculan los distintos sitios de explotación (como oleoductos o gasoductos), y a su vez cuentan con cuencas de soporte (por ejemplo, las represas que brindan energía eléctrica). Finalmente, esos enclaves están dentro de concesiones mineras o petroleras, las que a su vez tienen afectaciones territoriales de gran escala. Todo esto genera impactos ambientales en amplias zonas geográficas<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Por ejemplo, en el caso de Ecuador, una evaluación muestra que los bloques petroleros se superponen o afectan el conjunto de áreas protegidas y limitan la incorporación de otros sitios para la conservación, etc.; Lessmann *et al.* (2016).

El punto en esta cuestión es que las narrativas que defienden los extractivismos operan sobre las ideas de las escalas e intensidades en juego, y sobre los entendimientos del territorio. Al postular que otras actividades, como el cultivo de alimentos son más dañinas, la justificación minimiza la gravedad de los impactos ambientales a la vez que ignora la fuerte re-estructuración de los territorios cuando se imponen las concesiones.

Por otro lado, un reduccionismo geográfico también olvida que estamos ante dos tipos de explotaciones muy distintas. Tanto los hidrocarburos como los minerales son recursos naturales no renovables, o sean que se agotan, implicando una pérdida de patrimonio ecológico que es irreversible. En cambio, la agricultura descansa en recursos naturales renovables, y cuenta con muchas más opciones de aprovechamiento, con oportunidades para la sustentabilidad y la protección de la biodiversidad.

Además, en el caso de la minería se llegan a extremos representados en lo que debe calificarse como una *amputación ecológica* típica de la megaminería a cielo abierto, como los enclaves de Cerrejón en Colombia, Yanacocha en Perú o Carajás en Brasil. Allí ocurre una *amputación ecológica* en tanto es una remoción física del ambiente como resultado de minar millones de toneladas por año, y por ello la mitigación o remediación ambiental es en realidad un eufemismo para lidiar con algunos efectos secundarios (por ejemplo, polvo),

sin que pueda recuperarse el ambiente original (el concepto de amputación ecológica se discute en Gudynas, 2015a).

La narrativa que defiende los extractivismos reduce, minimiza u oculta todas estas particularidades, como si fueron lo mismo los recursos

renovables y los no renovables. Son narraciones que anulan las particularidades, ya que es posible reconvertir el uso de la tierra hacia prácticas agroecológicas, pero no existe nada parecido a una explotación minera o petrolera “ecológica” u “orgánica”.

## Petróleo y cambio climático

Las narrativas políticas que defienden la explotación petrolera también deben lidiar con las duras críticas que reciben los hidrocarburos como responsables del cambio climático global. Es frecuente que el argumento esgrimido por las naciones del sur sea advertir que sus emisiones de gases invernadero son muy pequeñas, y por ello tienen el “derecho” de seguir extrayendo crudo, asignándole la responsabilidad a los países industrializados.

Narraciones de este tipo han sido aprovechadas por ejemplo por el gobierno de Evo Morales, denunciando que los responsables del cambio climático son los países industrializados, y que las naciones en desarrollo tienen ahora el *derecho* de aprovechar esos recursos para su *desarrollo*. Los dichos de Baptiste que aquí se analizan están en la misma perspectiva, ya que al mismo tiempo que defiende el extractivismo petrolero afirma que Colombia *no aporta* gases de efecto invernadero o que su contribución no es significativa, y que las emisiones importantes son las que provienen desde la agricultura, ganadería y deforestación.

En este caso también hay varias incorrecciones ante la evidencia empírica. En realidad Colombia sí produce gases invernadero; una reciente estimación indica que emite 177.6 mega toneladas de equivalentes de CO<sub>2</sub>. Lo mismo se repite con otros países latinoamericanos, ya que todos son emisores. Seguramente el dicho de Baptiste fue una metáfora ya que ella agrega que esas emisiones no son *sensibles* en el total global al estar en el orden del *cero, coma, cero, cero, algo*. Pero tampoco es ese el caso, en tanto la participación colombiana en el total mundial es mucho más alta, ubicándose en el 0,37% (y otro asunto es la discusión si ese porcentaje es mucho o poco).

El punto para el presente análisis es que se usan metáforas que descansan en errores: como Colombia produciría comparativamente menos gases invernadero se ofrece la imagen de que no los emite. Esto se hace además insistiendo en privilegiar el saber científico frente a los “mitos” populares o de la prensa, pero que cuando es examinado con rigurosidad muestra que también desde el espacio de los expertos se cae en distorsiones.

Tampoco es correcto el argumento complementario de Baptiste adjudicando al medio rural (agropecuaria, deforestación y cambios en el uso del suelo) como principal origen de emisiones. Por el contrario, la primera fuente de emisiones colombianas, con el 49% del total, es lo que se denomina sector *energético* (que incluye la quema de combustibles, la generación de electricidad, el transporte, la construcción, etc.). Asociados a éste se encuentran gases de procesos industriales y residuos, con 7,6%. En cambio, las emisiones que provienen del medio rural, la agricultura y los cambios en el uso del suelo se estiman en 40% del total<sup>7</sup>.

Como resultado, Colombia es un aportante a los gases invernadero, y una parte significativa proviene de quemar hidrocarburos. Su responsabilidad aumenta ya que los hidrocarburos que se extraen del país se quemarán en algún otro sitio y también contribuirán al calentamiento global. En este último caso se debe observar el papel de las empresas.

En efecto, cuando se atiende a las responsabilidades de las empresas se encuentra otra situación. Muchas corporaciones del sur, y varias de ellas estatales, tienen las mayores responsabilidades en proveer los hidrocarburos. Las compañías más contaminantes han sido **Saudi Aramco** (empresa estatal de Arabia Saudita) seguida por **Chevron** (corporación privada basada en EEUU), a partir de las emisiones de CO<sub>2</sub> emitidas entre 1880 y 2010 (Ekwurzel, 2017). En ese listado también están las empresas que operan extrayendo petróleo desde Colombia. Por ejemplo, **Ecopetrol** de Colombia aparece en el puesto 59 en un ranking global de las 90 petroleras más contaminantes. Entonces, tanto las empresas como el país, tienen responsabilidades en estos aspectos.

Es por estas razones que la comunidad científica agrupada en el Panel Internacional en Cambio Climático reclama severas restricciones a la civilización petrolera, incluyendo dejar buena parte del crudo remanente en tierra. En cambio, cuando se apuesta a explotar hasta la última gota

<sup>7</sup> Datos del CAIT del World Resources Institute, resumidos en Greenhouse gas emissions in Colombia, US AID, Marzo 2017.

de petróleo invocando necesidades económicas nacionales como minimizando los impactos locales, Baptiste apunta en una dirección totalmente opuesta a la de aquel panel. Es más, se adentra en un sendero no es muy distinto al de Donald Trump. Es que el presidente de Estados Unidos también prioriza los intereses económicos nacionales y no cree que la explotación de hidrocarburos o carbón sean un problema ecológico (afirmó que

eran una invención de China). En los dos casos se privilegia una condición específica nacional, una adhesión a los modelos convencionales de crecimiento económico, y una suspensión de otras informaciones científicas. Es una dinámica donde la evidencia científica se usa intermitentemente: se la aprovecha cuando refuerza el discurso convencional del desarrollo y se la subordina o excluye cuando lo contradice.

## Los roles empresariales

En estas narraciones otro conjunto de argumentos se enfocan en el papel de las empresas, presentándolas como eficientes e innovadoras, que aprovechan todos los avances científicos-tecnológicos para reducir sus impactos, y responsables con el ambiente y las comunidades. Baptiste, por ejemplo, enumera cualidades que presenta como positivas y con adjetivos contundentes: el sector petrolero sería dinámico, muestra una *innovación impresionante*, ha reinvertido buena parte de su “riqueza” en innovación, genera todo el tiempo competitividad y eficiencia<sup>8</sup>. Se ofrece la idea que las compañías logran la mejor gestión ambiental posible y eso refuerza los argumentos que minimizan los impactos ambientales en los hidrocarburos. Tampoco pasa desapercibido que se ofrecen argumentos que alimentan las narrativas que señalan que la gente “no percibiría” la evolución positiva de las empresas, y eso alimentaría la desconfianza e incertidumbre en el público. Se sugiere que ese desconocimiento alimenta las resistencias a los extractivismos, pero que “si supieran”, los abrazarían.

Es necesario examinar tanto los argumentos como la organización de estas narraciones. Comenzando por lo más obvio, nunca debe olvidarse que la “riqueza” de las empresas petroleras (o sea capital) va sobre todo a sus accionistas y los servicios de su deuda, y no a la innovación científico-tecnológica. En efecto, ha existido una caída estimada en el 15% de las reinversiones en investigación y desarrollo de las compañías en 2015, y un adicional 5 % en 2016, según la Agencia Internacional de Energía<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> *Me opongo a las consultas populares...* entrevista citada en la nota 2.

<sup>9</sup> “IEA: Oil, Gas R&D Investment Stumbles, Despite Technology Benefits”, V. Addison, *E&P (Exploration & Production) Magazine*, 11 Julio de 2017, <https://www.epmag.com/iea-oil-gas-rd-investment-stumbles-despite-technology-benefits-1642791#p=full>.

La gestión ambiental de las empresas basadas en la llamada *responsabilidad social* muestran que no tienen efectos sustantivos o son muy modestos (Frynas, 2005). En efecto, el sector petrolero tiene un historial negativo en el cumplimiento de exigencias y controles ambientales. En América del Sur se observan incumplimientos de normas ambientales y de los códigos de responsabilidad de las propias empresas, no necesariamente emplean las mejores tecnologías disponibles, ocultan accidentes, etc.; el caso ecuatoriano ilustra muchas de esas inconductas (véase Kimerling, 2001). Ni siquiera los nuevos gobiernos progresistas han logrado de otra manera una supuesta responsabilidad empresarial (Cisneros y Christel, 2014). Incluso en EEUU, la Agencia de Protección Ambiental repetidamente encuentra todo tipo de irregularidades e incumplimientos en el sector petrolero (O’Rourke y Connolly, 2003).

Además, al contrario del optimismo tecnológico simplista, las empresas siguen involucradas en accidentes, especialmente derrames, que responden precisamente a limitaciones tecnológicas. En Colombia esto ha ocurrido varias veces (por ejemplo, al poco tiempo de las declaraciones optimistas de Baptiste tuvo lugar un derrame petrolero en Casanare<sup>10</sup>), son muy repetidos en la Amazonia de Ecuador y Perú<sup>11</sup>, han sucedi-

<sup>10</sup> Después de 3 días apareció explicación de *Perenco Colombia Limited* sobre derrame de crudo, Prensa Libre Casanare, 21 Junio de 2017, <http://prensalibrecasanare.com/industria/petrolera/25735-despuys-de-3-dnas-apareci-explicacion-de-perenco-colombia-limited-sobre-derrame-de-crudo.html>.

<sup>11</sup> Por ejemplo, en Perú se padecen muchos derrames por roturas de oleoductos, a un promedio de uno cada 3 meses. Una evaluación reciente muestra que al menos el 60% se deben a razones distintas a los sabotajes, entre ellas inadecuado mantenimiento. Asimismo, mientras las compañías niegan impactos ambientales, las evaluaciones independientes muestran daños sobre la fauna y flora. Véase Ruiz M. *et al.*, 2017; Honty, 2016.

do en Bolivia, y más recientemente en Argentina y Chile <sup>12</sup>. Es común que las empresas no informen a tiempo, lancen acusaciones contra las comunidades locales, para luego descubrirse que su mantenimiento de los ductos era deficiente. Por lo tanto, las narrativas de empresas que son juiciosas en su gestión y un Estado riguroso en controlar a esas compañías, es a lo sumo apresurado. Algo similar ocurre con los extractivismos mineros, donde se acumulan casos de accidentes, algunos que se intentan minimizar (como ha sucedido en Argentina con las denuncias de derrames en la mina Veladero)

<sup>12</sup> Por ejemplo, en Argentina se estima que en las explotaciones de la cuenca de Neuquén se producen dos derrames por día; un total de 3368 “incidentes ambientales” en cuatro años; “Los derrames de Vaca Muerta”, *Página/12*, 19 noviembre 2018, (<https://www.pagina12.com.ar/156412-los-derrames-de-vaca-muerta>). En Chile, un reciente derrame en el extremo sur es considerado *el más grande de los últimos 20 años*, *Tiempo Sur*, Río Gallegos, 19 octubre 2018, (<https://www.tiemposur.com.ar/nota/159043---es-el-derrame-de-petroleo-mas-grande-de-los-ultimos-20-anos-de-chile>).

y otros que escalan a desastres sociales y ambientales apabullantes (como sucedió en Brasil con las roturas de las represas de relaves de Mariana en 2016 y de Brumadinho en 2019).

Esta narrativa extractivista deriva hacia la presentación de las corporaciones como si fueran agencias de protección ambiental o institutos de beneficencia social. De esa manera se relega que las metas empresariales no son ni ambientales ni sociales, sino que buscan asegurar beneficios económicos que mantenga su funcionamiento y generen ganancias para sus propietarios. Las publicaciones del propio sector petrolero reconocen que su ingeniería no busca proteger el ambiente sino maximizar la extracción, y que para que eso sea posible en las circunstancias actuales se deben atender los impactos ambientales y cumplir con exigencias y controles (véase Wojtanowicz, 2016). En otras palabras, se asumen medidas ambientales no como un fin en sí mismas, sino como una inevitable condición para mantener la rentabilidad.

## Definición, impactos locales y efectos derrame

Una particularidad de las narrativas extractivistas que pasa repetidamente desapercibida es que el objeto defendido nunca es definido con precisión. Se toma a los extractivismos en general, o los que son específicos como la minería o petróleo, como si fueran una simple apropiación de recursos naturales. De esta manera no habría diferencias significativas entre, por ejemplo, un campesino que obtiene sus alimentos de la Naturaleza y la extracción que se hace de minerales o hidrocarburos. Esta no es una cuestión menor ni un descuido, sino que aquí se sostiene que es un componente central en el armado de esas historias.

En efecto, en la medida que la definición de extractivismos sea más ambigua y difusa, eso permite superponerse y confundirse con otros muy distintos aprovechamientos del entorno en cuanto a su intensidad, los volúmenes apropiados, la inserción en el comercio o sus impactos. De esa manera es mucho más sencillo defender este tipo de actividades. Por ejemplo, atacar a los extractivismos sería conceptualmente análogo a criticar el cultivo de alimentos, y siguiendo ese tipo de comparaciones se facilita la adhesión social y cultural.

Por lo tanto, en cualquier contra-narración se vuelve esencial dejar en claro que esa renuencia a precisar el concepto tiene una finalidad política, y a la vez, ante ella se tiene que ofrecer una defi-

nición que sea precisa y adecuada. Atendiendo esto, aquí se sigue la definición de extractivismos como aquellos modos de apropiación de recursos naturales caracterizados por su alto volumen o intensidad, y donde la mitad o más son exportados como materias primas (véase Gudynas 2015a por más precisiones). De esta manera, los extractivismos son plurales (mineros, petroleros, agrícolas, forestales, etc.), están anclados a los sitios donde se encuentran los recursos naturales pero dependen de la globalización en tanto los mercados internacionales son los destinos de las exportaciones. No se está ante una “industria” ya que se exportan materias primas; la etiqueta de *industria extractiva* es otra confusión con sentido político y cultural para aprovecharse de la legitimidad social con la que cuentan las imágenes de fábricas y obreros. Asimismo, actividades como el cultivo de alimentos para usos locales o nacionales no constituyen un extractivismo, y de esa manera se pueden distinguir entre distintos tipos de apropiaciones.

Esta definición permite dar otro paso para analizar las narraciones políticas. En general el debate público está centrado en los impactos locales, como ocurre con el deterioro ambiental. Pero los extractivismos también generan los llamados *efectos derrame*, que son modificaciones en las políticas públicas y en concepciones políticas que se toman para viabilizarlos, y que no están



acotadas a un emprendimiento ni a un sitio en el territorio <sup>13</sup>.

Se cuentan entre éstos, por ejemplo rebajar las condiciones ambientales para inicialmente se hacen para promover ciertos proyectos extractivos (como las licencias ambientales *express* que los gobiernos promocionan en países como Perú y Colombia), pero que terminan deteriorando toda la normativa ambiental en todo el territorio. Otros derrames sustantivos ocurren con los derechos humanos, ya que para apoyar un proyecto se vuelve común esconder información o tolerar la violencia local. En esas situaciones se derrama un recorte sobre la salvaguardia de los derechos ciudadanos. De la misma manera hay derrames económicos, políticos, culturales, etc. Como pueden verse los efectos derrames no

<sup>13</sup> Un resumen de la distinción entre sus impactos y derrames en Gudynas (2015b).

están acotados espacialmente, y muchos de ellos son previos a esos emprendimientos, ya que son condiciones para hacer posible las inversiones.

Es extremadamente importante tener presente esta distinción. En sectores como hidrocarburos y megaminería los efectos derrame pueden ser mucho más importantes y graves que los impactos locales. Esto se debe a que no son fácilmente identificados como tales y son además más difíciles de revertir.

Así como las narrativas políticas minimizan los impactos locales, también operan sobre los efectos derrame. En general, la defensa de los extractivismos no reconoce el vínculo entre los extractivismos y los derrames; se intenta disociarlos presentándose esas modificaciones en las políticas públicas como medidas en sí mismas. Por ejemplo, la flexibilización para capitales extractivistas son publicitados como medidas de promoción de la inversión extranjera.

## Desarrollo y economía

Las narrativas extractivistas operan sobre un número de derrames vinculados con las estrategias de desarrollo. En ellas se presentan a los extractivismos como un componente destacado en promover el crecimiento económico, en tanto permite aportar a las exportaciones, ingreso de inversión extranjera, promoción del empleo, etc.

En el caso colombiano de Baptiste que se sigue aquí, también apela a argumentos en este plano, destacando los recursos económicos que brindaría, lo que le permite ofrecer un mandato imperativo: se debe sacar hasta la última gota de petróleo. Obsérvese que en su narrativa se complementan estos argumentos de derrames económicos positivos con la minimización de los impactos locales. Se genera de esta manera una ilusión donde hay muchos beneficios y pocos perjuicios. No debe olvidarse que la justificación económica de los extractivismos es muy común en todos los países.

El argumento de los beneficios económicos sólo es posible si se distorsionan severamente las contabilidades ambientales, dejándose de lado los costos económicos que generan los impactos negativos de los extractivismos. Para ilustrar esto, véase que el precio del crudo en los mercados internacionales no incorpora los costos ambientales y sociales, como tampoco las pérdidas económicas por daños en la salud, en la biodiversidad, etc. Esos costos no son cargados a las empresas exportadoras, y de hecho los terminan asumiendo

las comunidades locales, los gobiernos subnacionales o la sociedad, sea en la actualidad o transfiriéndolo a las generaciones futuras. Con todas estas distorsiones, la exportación de hidrocarburos siempre es un buen negocio porque es barato y no existe una contabilidad rigurosa por la cual a esos beneficios se les resten los costos económicos. Eso no sucede, entre otras cosas, porque hay narrativas políticas que sistemáticamente desvinculan esos costos de los extractivismos y los ignoran.

Todo esto está muy claro en la entrevista a Baptiste ya que no hay indicaciones de costos económicos socioambientales y en cambio aparece como convencida de las bondades económicas de la explotación petrolera.

Las narrativas económicas de este tipo son parte de una familia de narraciones convencionales desarrollistas, que en las visiones latinoamericanas sostienen que la exportación de recursos naturales es indispensable para el crecimiento económico. Este tipo de reduccionismo economicista en el caso de los extractivismos ha sido cuestionado desde varios frentes (económicos, sociales, ambientales), mostrando que no necesariamente implica progresos económicos, superación de la pobreza o autonomía ante la globalización (estos aspectos se discuten en Gudynas, 2015a).

En este terreno también se invoca a la ciencia como legitimación, tal como ocurre con las cerezas en afirmar que los extractivismos son “mejores” y otras alternativas son “peores”. Pero

como se acaba de explicar, esas afirmaciones son insostenibles ya que no se cuenta con evaluaciones serias, sistematizadas y repetidas de los todos costos y beneficios económicos de los extractivismos. Dicho de otro modo, la academia carece de la información necesaria para decir que es “ventajoso” extraer todos los hidrocarburos.

Hay pocos estudios que incorporan los costos sociales y ecológicos, y sus resultados muestran una situación muy distinta. Por ejemplo, en Ecuador, donde fue realizada una evaluación multicriterio que incorpora algunos de esos otros aspectos, arrojó que para el país es más beneficioso dejar el crudo en el subsuelo amazónico (Vallejo *et al.*, 2011).

Las mismas confusiones ocurren cuando se esgrimen como justificaciones que los extractivis-

mos permiten ofrecer compensaciones económicas a quienes pudieran ser afectados. Se brindan en algunos sitios ayudas económicas directas o indirectas en asistencia médica, vivienda, alimentos, empleo, etc., como si esto compensara los daños ambientales, sanitarios o sociales. Es esta otra distorsión ya que los pagos en dineros no reemplazan ecosistemas destruidos o la salud perdida. Pero en cambio termina generando instrumentos de gestión pública del tipo *te contamina, pero te pago*, con toda la perversidad que implican.

Se puede concluir que en el terreno de los derrames, las narrativas económicas y desarrollistas que se organizan brindando algunos argumentos, distorsionando ciertas informaciones, y sistemáticamente ocultando su propia ignorancia.

## Dos posturas científicas

En varios de los asuntos tratados arriba son frecuentes las invocaciones a la ciencia. Se presupone que los pareceres de los actores que poseen un título universitario o trabajan en instituciones académicas son ciertos o más ciertos que las posiciones de otras personas, que están basadas en “la ciencia”, y que ésta es un cuerpo objetivo y homogéneo de saberes.

Es necesaria mucha precaución ante esas posiciones. Comencemos por precisar que la minimización de los impactos ambientales o aseverar que la tecnología permite resolverlos, remite al terreno de las viejas ciencias cartesianas, ancladas en el positivismo, y por ello deterministas. Estas abordan al ambiente como un sistema que se puede conocer en detalle, y a su interior discurren interacciones simples que pueden ser predichas con cierta eficacia. El ecólogo sería algo así como un ingeniero que manipula sistemas ecológicos.

En cambio, los más recientes avances en ciencias ambientales discurren casi en un sentido inverso. El ambiente no se puede reducir a una simple maquinaria, no todos los componentes son conocidos, las relaciones entre ellos se entienden parcialmente, y éstas tampoco son simples vínculos causa-efecto. Hay todo tipo de interacciones y buena parte no son lineales ni acotadas en el tiempo o el espacio. De esta manera, las nuevas ciencias ambientales se mueven en la incertidumbre, y hacen del riesgo un elemento clave (en el sentido de la ciencia posnormal de

Funtowicz y Ravetz, 2000). Bajo esta perspectiva, el desempeño del ecólogo es muy distinto al estar limitado por la incertidumbre y el riesgo, y por ello tiende a favorecer un principio de precaución.

Este brevísimo repaso permite dejar en evidencia que no puede proclamarse que existe una única posición científica en esta materia. También muestra que las narrativas que defienden los extractivismos descansan en la vieja mirada cartesiana de la ciencia que alimenta el optimismo de la predicción y mitigación de impactos ambientales. Esa esencia determina muchas dificultades en que acepten las incertidumbres e ignorancias. Además, su talante termina en subordinar otros saberes.

Aunque estos asuntos se examinan en otra publicación (Gudynas, 2018), aquí se debe señalar que desde la perspectiva de la complejidad nunca se podría decir que la explotación petrolera tiene “cero” impactos, ya que eso es imposible de confirmar desde un punto de vista ecológico. En cambio, reconociendo la incertidumbre, se enumerarían los riesgos ecológicos de esas actividades.

Vestir a la minimización de los extractivismos como una verdad científica genera otros problemas asociados. Entre ellos se cuenta que puede debilitar todavía más las evaluaciones ambientales. Los promotores de los extractivismos pueden argumentar que como los recursos estatales son limitados, no tiene sentido seguir haciendo

evaluaciones más detalladas sobre ese tipo de explotaciones porque hay científicos que ya saben que revistes pocos impactos. Como esto va de la mano con las narraciones que presentan a las empresas como muy buenos gestores ambientales, incluso se podría solicitar dejar ese tipo de controles en manos de las propias corporaciones.

En el campo de la investigación en biodiversidad y ecología podría ocurrir algo similar. Los argumentos de académicos que minimizan los impactos de los extractivismos pueden ser usados para reducir las asignaciones de fondos de investigación en esas materias y utilizarlas en otras cuestiones. Todos estos extremos son inaceptables.

## Política, democracia y saberes

Entre los efectos derrames de los extractivismos se encuentran las reformulaciones y rediseños en el ámbito político. Entre éstos se registran las limitaciones en el acceso a la información, limitaciones en la participación ciudadana o la tolerancia a formas verticalistas de delegación democrática. Todo esto es entendible ya que allí donde la ciudadanía es adecuadamente informada e intercambia experiencias locales, advierte los severos riesgos que involucra, y por ello, cuando puede participar en las decisiones, es más proclive a rechazar esas actividades.

Por estas razones, las narrativas extractivistas también operan en esos ámbitos reforzando esos derrames que erosionan la política y la democracia. No sólo se defienden emprendimientos, sino que se erosionan mecanismos e institucionalidades vinculadas al acceso a la información, la participación y consulta ciudadana, y la salvaguarda de los derechos humanos. Se argumenta, por ejemplo, que las comunidades locales no están informadas adecuadamente, no saben analizar los datos, o tienen intereses políticos ocultos. Por lo tanto no tendría sentido que votaran, sino que antes deben ser “informadas” o “educadas”. En paralelo, se postula que las consultas no son necesarias, ya que la legitimidad democrática ocurre una vez, en el momento de las elecciones nacionales, departamentales o lo-

cales. Pero el punto a dejar en claro es que las narraciones se potencian entre sí, y entonces la defensa extractivista tiene implicaciones en debilitar las evaluaciones e investigaciones que podrían esclarecer mucho mejor sus efectos e impactos. Al tener menos investigaciones propias disponibles se vuelve más difícil revertir dichos como los de “cero impacto”. Esa brecha es aprovechada por varias empresas que se dedican a financiar a instituciones de investigación o enseñanza, seleccionando tanto temas como condiciones de investigación. Se consolida así una situación donde las investigaciones y conocimientos siempre serán limitados, alimentándose todavía más la ilusión de la ausencia de impactos.

Las personas que ganaron las elecciones pueden tomar todas las decisiones que quieren y no tienen obligaciones de consultar a la gente. Dicho de otro modo, se atacan instrumentos de democracia deliberativa y se potencian delegaciones verticales de la representación popular.

Lo mismo ocurre con la naturalización de la violencia y las violaciones de los derechos humanos alrededor de los extractivismos. Aquí se incluyen problemáticas que van desde el desplazamiento violento de comunidades al tráfico de mujeres para las redes de prostitución en campamentos mineros o petroleros, desde la judicialización de la protesta local a todas las trabas que hay para aclarar y sancionar el asesinato de líderes. El nivel de estos y otros problemas de violencia local no reciben las necesarias respuestas ni siquiera desencadenan enérgicos rechazos en el resto de la ciudadanía, especialmente en las grandes ciudades. A esta aceptación resignada de la violencia contribuyen directa o indirectamente las narrativas extractivistas.

Esto es independiente de la intención de quienes esgrimen esos discursos extractivistas, ya que muchos de ellos pueden rechazar esa violencia local. Pero mi punto es que al contribuir a la narrativa del éxito extractivismo se fortalecen narrativas que son funcionales a ese tipo de derrames políticos.

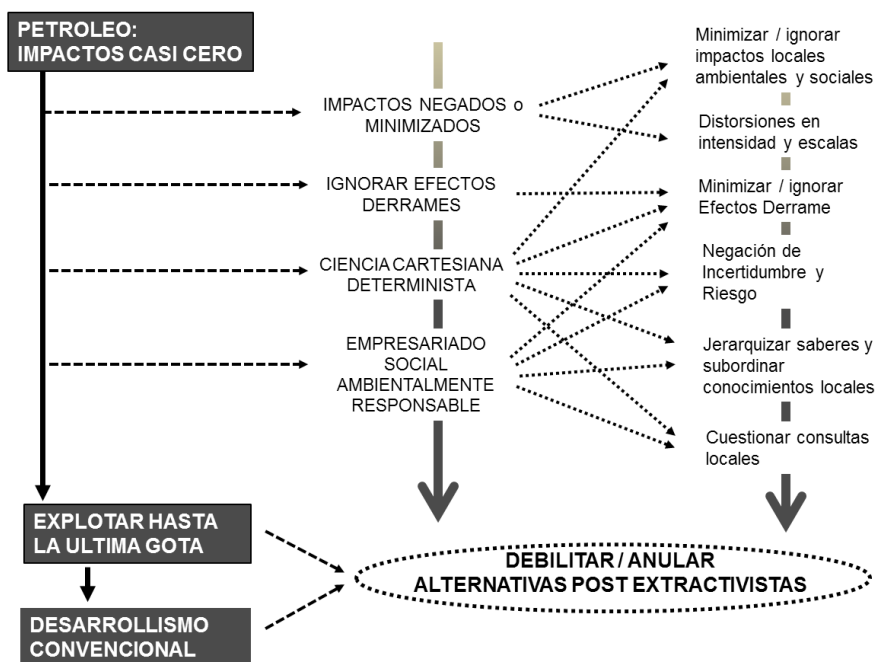
## Política, sentido común y opciones críticas

Las narrativas políticas que defienden los extractivismos son variadas, se organizan desde varios frentes y distintas perspectivas, y manejan un amplio conjunto de argumentos. Estas, a su vez están enmarcadas dentro de narrativas mayores con distintas posiciones económicas o políticas, por ejemplo (Fischer y Gottwies 2013, Hajer 1995). Entre esas grandes narrativas se incluyen por ejemplo las englobadas bajo las “locomotoras” del desarrollo del presidente J. M. Santos en Colombia (que incluía una locomotora minera), la defensa de explotar los yacimientos marinos petroleros en Brasil por el gobierno del Partido de los Trabajadores, o la imposición del *fracking* en la Patagonia de Argentina por la administración de M. Macri. De la misma manera, las narrativas extractivistas cobijan a su interior otras subhistorias tales como la supuesta efectividad de empresas o del control científico-técnico.

Las narraciones políticas extractivistas aprovechan unos argumentos pero a la vez excluyen otros, y se articulan selectivamente hacia arriba y abajo también aprovechando argumentos y posturas que les sean funcionales. Algunas de estas dinámicas son muy claras en la entrevista usada en este artículo ya que Baptiste escoge unos ciertos datos pero no otros, y el balance entre las presencias y las ausencias potencia su defensa de las petroleras.

Por otro lado, en las audiencias destinatarias de esos discursos hay agrupamientos que reproducen esa adhesión a los extractivismos. No debe interpretarse a las narraciones como la imposición de un discurso de una minoría sobre las mayorías, sino como expresión de una mutua vinculación, donde amplios sectores creen en la necesidad de explotar hasta el último gramo de minerales o la última gota de hidrocarburos, y todos ellos contribuyen a reproducir esas ideas. Tampoco estamos ante una creación reciente sino que resulta de una larga historia que se rastrea a tiempos de la colonia (véase por ejemplo ese recorrido en Machado Aráoz, 2014).

Esa dinámica es uno de los principales factores en generar el sentido común que una nación debe ser extractivista para progresar. Su prevalencia es generalizada y por ello ha sido identificado como cultura, ideología, hegemonía, religión, etc., por muy distintos autores. Las narrativas políticas extractivistas se blindan como un sentido común, dado por válido, que se legitima a sí mismo y a la vez excluye constantemente a los reclamos por alternativas, e incluso para algunos se vuelven impensables otras opciones. Eso explica que, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, repetidamente calificara como “locos”, e incluso que se debía hospitalizar, a los que se oponían a los extractivismos y reclamaban alternativas.



**Figura 1.** Contenidos argumentales y encadenamientos en las narrativas de apoyo a la explotación petrolera. Representación esquemática que incluye las dos principales afirmaciones a examen (izquierda), los argumentos principales esgrimidos (centro) y las consecuencias en las políticas y la gestión pública (derecha). Los argumentos y sus consecuencias a su vez se articulan en debilitar o anular las alternativas a los extractivismos y por lo tanto refuerzan las posturas convencionales sobre el desarrollo.

Esto lleva a analizar la conformación de un “sentido común” extractivista, y en ello es provechoso recordar los aportes de Stuart Hall en un recorrido que se nutre de Antonio Gramsci. El sentido común está referido a formas de pensar cotidianas, simples, vernaculares, en buena medida intuitivas, y que están ampliamente compartidas en la sociedad (Hall y O’Shea, 2015). Tiene sus lógicas y contenidos, y por ello se lo asume como coherente aunque no necesariamente lo sea. El caso abordado por Hall y O’Shea (2015) para el Reino Unido ofrece algunas pistas a la actual situación latinoamericana, al analizar la lenta penetración del neoliberalismo hasta transformar los sentidos comunes de la sociedad británica. Se modificaron aspectos estructurales, tales como naturalizar la idea de una sociedad que es un agregado de consumidores competitivos, como cualidades afectivas, como la ansiedad o la depresión.

Un proceso de este tipo ocurre en América Latina con los extractivismos. Se difunden poco a poco, saberes y sensibilidades que refuerzan las viejas ideas de una muy rica naturaleza que debe ser explotada, actualizada con un apego al desarrollismo economicista, la minimización de los impactos locales y la naturalización de los efectos derrame que transforman las políticas públicas, llegando al extremo de naturalizar la violencia.

El sentido común extractivista es compartido por ideologías y prácticas políticas conservadoras y progresistas. Un ejemplo impactante es la promoción del fracking en la Patagonia, iniciada por la administración de C. F. de Kirchner y seguida, todavía con más intensidad, por el gobierno de M. Macri, con apoyo de varios sectores, incluyendo sindicatos. Es así que gobiernos de muy distintos regímenes políticos y marcos ideológicos, terminan bajo ese mismo estilo pero difiriendo en las mediaciones.

Es por ese tipo de razones que es oportuno regresar a Hall, cuando advierte que ante la crisis de su tiempo, la izquierda ofrecía lecturas desde posiciones bien atrincheradas y tradicionalistas, pero que en muchos casos no era capaz de brindar un marco analítico o teórico adecuado a su contexto y tiempo. Por ello sus propuestas políticas resultan incompletas (Hall 1979: 14).

Se podría replicar que esa sentencia era apropiada para los avances de la “nueva derecha” thatcherista en la Inglaterra de fines de la década de 1970, pero no tiene relevancia para varios casos latinoamericanos, donde hay gobiernos que se autodefinen como izquierda. Pero en realidad esa problemática se repite en la actualidad, ya que la esperanza de una mirada crítica radical se encogió a medida que muchos intelectuales de izquierda se volvieron progresistas, y terminaron en el sentido común extractivista. Muchos de esos espacios de volvieron usinas que nutrieron las narrativas de apoyo al extractivismo,

evitando definirlos con precisión, minimizando los impactos locales e ignorando los efectos derrame<sup>14</sup>. Proliferaron debates sobre el papel de las empresas estatales y los marcos de tributación, lo que sin duda es importante, pero no sobre la viabilidad y las consecuencias de ese tipo de apropiación de recursos naturales<sup>15</sup>.

Las alternativas posibles pasaron a ser variedades de extractivismos en manos de empresas estatales o con muy alta carga tributaria, como si ello hiciera desaparecer mágicamente los impactos locales y los efectos derrame. Se generó una situación donde proliferaban las citas a Marx o Lenin para justificar a los extractivismos y a la vez criticar a los movimientos sociales (como hacía Rafael Correa en Ecuador o Alvaro García Linera en Bolivia).

Por otro lado, los efectos derrames, y entre ellos los que implican violencia, debilitamiento de la salvaguarda de derechos y recortes democráticos, seguramente jugaron un papel en permitir la proliferación de sectores políticos de extrema derecha. Esto llegó a un caso extremo con el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, anunciando una exacerbación de los extractivismos.

Varios sectores de la intelectualidad progresista suspendieron sus abordajes críticos por obediencia partidaria, por quedar atrapados dentro de la maquinaria del Estado, o porque sinceramente creían en todo ello. Las razones escapan a este artículo, pero sin duda debe indicarse que fueron exitosos en influenciar a los gobiernos y en brindarles argumentos y narraciones para defender sus extractivismos. Esos silencios fueron a su vez aprovechados por actores políticos conservadores e incluso de la extrema derecha, como ocurrió en Brasil.

Paralelamente, existían múltiples voces latinoamericanas que exploran salidas a esa dependencia extractivista, tanto dentro de la sociedad civil como en la academia, pero que fueron en buena medida marginalizadas. La diseminación de las narrativas extractivistas fue a costa de no entender ni incorporar las denuncias y alertas ciudadanas, no saber leer adecuadamente la evidencia científica más reciente de los impactos en juego, y hasta olvidar los mandatos propios de la izquierda latinoamericana por

<sup>14</sup> Un buen ejemplo de la defensa de extractivismos progresistas de base estatal y que a la vez desestima las alertas y críticas es Borón (2012). El autor entiende que no hay alternativas a los extractivismos ni al desarrollo (su posición sería un rechazo a un desarrollo que es capitalista, pero no a la idea de desarrollo en sí misma, y entonces hay que buscar uno de otro tipo). No pasa desapercibido tampoco varias ausencias en sus análisis, notablemente la de los pueblos indígenas.

<sup>15</sup> Por ejemplo, ante la explotación de petróleo en la plataforma oceánica de Brasil, la discusión política estaba centrada en asuntos como las regalías y cómo repartirlas, pero no cuestiones como los riesgos ambientales de esas perforaciones en el mar, en la profundización de la primarización exportadora y en el fortalecimiento de la subordinación comercial.

ofrecer críticas radicales. Dicho de otro modo, y otra vez recordando a Hall (1979), hubieron muchos académicos atrapados en las narrativas desarrollistas, que no supieron abordar los aspectos particulares y específicos de la coyuntura histórica en la que estaban viviendo en América

Latina. Aquellos actores que transitaron por narrativas ancladas en los sentidos comunes desarrollistas erosionaron las propias capacidades de criticidad. Lastimosamente, esa criticidad es esencial para explorar caminos de salidas a los extractivismos.

## Narrativas, contra-narrativas y alternativas

El análisis de las narrativas políticas es una perspectiva sobre procesos que son propios a la vida política y los debates públicos. Por lo tanto, una alternativa a los extractivismos no pasa por anular esos debates o imponer otra narrativa por la fuerza. Eso sería como maniatar a la propia política. En cambio, es necesario entender las narraciones que los apoyan y poder deconstruirlas.

Simultáneamente esto requiere erigir contra-narrativas en varios frentes para dejar en claro los impactos de los extractivismos y sus íntimas vinculaciones con unos ciertos tipos de desarrollo. A partir de los principales atributos señalados arriba es posible identificar cuestiones a rebatir, argumentos a refutar, y encadenamientos a revisar. Por ejemplo, no es aceptable disfrazar una narrativa específica como una expresión de la “ciencia”, y en cambio se deben defender otras argumentaciones que admitan la incerteza, expresen riesgos, y sean participativas. Las contra-narrativas deben mostrar los impactos locales, especialmente ante los sectores urbanos, tanto aquellos que afectan el ambiente como los sociales, especialmente las violaciones en los derechos. Un esfuerzo intenso es necesario en mostrar los efectos derrames de los extractivismos, como pueden ser las condicionalidades económicas o el debilitamiento de la democracia. Existen muchos esfuerzos ciudadanos en este sentido, y están en marcha coordinaciones y complementaciones en varios países que ilustran la potencialidad del trabajo en red.

La construcción de narrativas alternativas que desnuden los impactos de los extractivismos no está exenta de caer en exageraciones, distorsiones o deformaciones. Sin duda que en el seno de las organizaciones ciudadanas hay todo tipo de manejo de la información, con mayor o menor calidad. Es cierto que se escuchan disparates, pero lo que debe entenderse que el vecino de una comunidad no está obligado a cumplir con los estándares de la comunicación científica, y no puede ser juzgado bajo esa escala. Esto permite cuestionar uno de los componentes en las narrativas extractivistas al acusar a los grupos

locales de moverse bajo el influjo de mitos o de la publicidad, cuando una cierta mitología también afecta a los ámbitos académicos convencionales.

Las narrativas extractivistas cuentan con múltiples apoyos en el estado, la política, las empresas y la academia, también en los medios de prensa e incluso usan publicidad. Es por ello que es casi un milagro que una comunidad pueda tener una visión independiente sobre esas actividades cuando todos aquellos actores no dejan de repetir las bondades y necesidades de esos emprendimientos.

Desde la mirada de las comunidades locales es totalmente comprensible que desconfíen de los expertos, y esto no debe ser tomado a la ligera como una muestra de ignorancia o atavismo. Pensamos por un momento qué sucede cuando líderes comunitarios que vienen escuchando una y otra vez que el dictamen experto que el extractivismo no tendrá mayores consecuencias, pero de todos modos ellos sufren sus impactos. ¿Qué ocurre cuando se revisa con cuidado la información de un proyecto similar en otra región o país y se encuentra que ha dejado todo tipo de impactos negativos? ¿Cuáles deberían ser las reacciones cuando tras examinar con detalle los discursos expertos se encuentran múltiples errores e imprecisiones según los estándares de ese mismo saber académico? Planteo estas preguntas retóricas para mostrar que las comunidades locales y la sociedad civil tienen todo el derecho de ser desconfiadas.

Reconocer esta problemática no significa caer en una postura anti-científica. Muy por el contrario, es aportar a nuevas miradas en ciencias del ambiente que reconocen la complejidad y la incertidumbre, y que además son más participativas.

También es importante hacer otra advertencia. La ampliación de la participación no asegura una reversión inmediata de los apoyos a los extractivismos a nivel local. Por ejemplo, pueden haber consultas locales que resulten en apoyar ese tipo de emprendimientos, ya que los grupos locales son heterogéneos, y como se indicó arriba, la adhesión a la explotación de los recursos

naturales descansa en componentes culturas muy arraigados en nuestros países. Es más, esta problemática es muy evidente en la actualidad en Bolivia y alimenta una conflictividad muy intensa.

La amplia diseminación del apego a los extractivismos esta reforzado continuamente por las narrativas que alimentan ese tipo de sentido común. Hasta podría argumentarse que en algunos países, particularmente los petroleros, se cae en un “populismo extractivista”, donde las narraciones sirven a presentar esa apropiación intensiva de los recursos naturales como una equivalencia entre diferentes demandas. Esto es aprovechado por los gobiernos para presentarse como los únicos capaces de llevar adelante esa tarea en nombre del “pueblo”, alimentando así una confrontación permanente (todo esto en el sentido que Laclau, 2005, le otorga al concepto de populismo).

Esto explica que para lidiar con esta situación incluso sea necesario proponer *narrativas insurgentes*. Su propósito sería explorar alternativas que el sentido común extractivista, y con ello el desarrollo, consideran imposibles e incluso impensables. Allí radica una de las mayores potencialidades de las contra-narrativas. Pero también de sus urgencias, ya que muchos de sus impactos son intolerables y requieren respuestas inmediatas, que no pueden esperar. Dicho de otra manera, se debe intervenir activamente en las raíces más profundas de las culturas contemporáneas latinoamericanas. El sentido común está resumido en el slogan de explotar el petróleo *hasta la última gota*, mientras que las

alternativas deben presentar su idea de dejar el crudo bajo tierra, o sea, ni siquiera sacar una gota. Son posiciones insurgentes ya que implican subversiones a esos sentidos comunes. Esto requiere, por supuesto, recuperar el sentido de criticidad e independencia en académicos y militantes, tal como se reclamaba en la sección anterior. También necesita entender y acompañar las resistencias ciudadanas que proliferan en todo el continente.

Existen varios ensayos en ese sentido, especialmente en Perú y Bolivia, bajo el concepto de transiciones al post-extractivismo. Los contenidos de esas propuestas escapan al objetivo del presente artículo, pero debe apuntarse que su enorme potencial radica en que se están ofreciendo narraciones políticas cada vez más organizadas y articuladas de una vida, de estados y de regiones que no dependen de los extractivismos. Eso explica que desde el empresariado se considere a esas propuestas como una de sus principales amenazas a enfrentar, como ocurre en Colombia (el post-extractivismo recibe amplia consideración y es severamente cuestionadas en el reciente *libro blanco* de la *minería moderna para el progreso* editado por las cámaras empresariales de la minería de Colombia; Ponce Muriel, 2014). Estas experiencias muestran que los argumentos son muy importantes pero también lo es la capacidad en encadenarlos y complementarlos en el marco de contra-narraciones que no sólo denuncien los impactos sino que muestren opciones alternativas al desarrollo, y que sean entendidas y sentidas como posibles, e incluso deseables.

## Referencias bibliográficas

- Abdel-Shafy, H.I. y Mansour, M.S.M. (2016). "A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: source, environmental impact, effect on human health and remediation". *Egyptian Journal Petroleum*, N° 25, pp. 107-123.
- Antonelli, M.A. (2014). "Megaminería transnacional e invención del mundo cantera". *Nueva Sociedad*, N° 252, pp. 72-86. Buenos Aires.
- Arellano, P., Tansey, K., Balzter, H. y Boyd, D.S. (2015). "Detecting the effects of hydrocarbon pollution in the Amazon forest using hypersepectral satellite images". *Environmental Pollution*, N° 205, pp. 225-239.
- Borón, A. (2012). *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Buenos Aires: Luxemburg.
- Campanini, J., Villegas, P., Jiménez, G., Gandarillas, M. y Pérez, S.M. (2014). *Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el Aguaraqüe*. Cochabamba: Informe OMAL N° 12.
- Cisneros, P. y Christel, L. (2014). "The democracy deficit of corporate social responsibility in post-neoliberal times: an analysis of the Argentinian and Ecuadorian experiences". *Journal Cleaner Production*, N° 84, pp. 174-182.
- Ekwurzel, B. y colab. (2017). "The rise in global atmospheric CO<sub>2</sub>, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers". *Climatic Change*, N° 144, pp. 579-590.
- EJOLT (2015). "The Texaco-Chevron Case in Ecuador. EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade)". *Fact Sheet*, N° 42, pp. 1-12.
- Fiori, S. M. y Zalba, S. M. (2003). "Potential impacts of petroleum exploration and exploitation on biodiversity in a Patagonian Nature Reserve, Argentina". *Biodiversity Conservation*, N° 12, pp. 1261-1270.
- Fischer, F. (2003). *Reframing public policy. Discursive politics and deliberative practices*. New York: Oxford University Press.
- Fischer, F. y Gottweis, H. (2013). "The argumentative turn in public policy revisited: twenty years later". *Critical Political Studies*, N° 7, pp. 425-433.
- Fontaine, G. (2003). *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: reglas de juego*. Quito: FLACSO y GPA Petroecuador.
- Frynas, J.G. (2005). "The false developmental promise of Corporate Social Responsibility: evidence from multinational oil companies". *International Affairs*, N° 81, pp. 581-598.
- Funtowicz, S.O. y Ravetz, J.R. (2000). *La ciencia posnormal*. Barcelona: Icaria.
- Gsottbauer, E. y van den Berg, J.C.J.M. (2011). "Environmental policy theory given bounded rationality and other-regarding preferences". *Environmental Resource Economics*, N° 49, pp. 263-304.
- Gudynas, E. (2014). "Sustentación, aceptación y legitimación de los extractivismos: múltiples expresiones pero un mismo basamento". *Opera*, Bogotá, N° 14, pp. 137-159.
- (2015a). *Extractivismos, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*. Cochabamba: CEDIB y CLAES.
- (2015b). "Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame". *La Revista, boletín Sociedad Suiza Americanistas*, N° 76, pp. 13-23.
- (2018). "Múltiples paradojas: ciencia, incertidumbre y riesgo en las políticas y gestión ambiental de los extractivismos". *Polisemia*, Bogotá, N° 14, pp. 5-37.
- Hajer, M. (1995). *The politics of environmental discourse. Ecological modernization and the policy process*. Oxford: Oxford University Press.
- Hall, S. (1979). "The great moving right show". *Marxism Today*, enero, pp. 14-20.
- Hall, S. y O'Shea, A. (2015). "Common-sense neoliberalism". En S. Hall, D. Massey y M. Rustin (ed.) *After neoliberalism? The Kilburn manifesto*. Londres: Lawrence & Wishart.
- Honty, G. (2016). *Perú: 60 derrames en 15 años*. ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones), 10 marzo. Quito. Disponible en <https://www.alainet.org/es/articulo/175970>.
- Jones, M.D. y McBeth, M.K. (2010). "A narrative policy framework: clear enough to be wrong". *Policy Studies Journal*, N° 38, pp. 329-353.
- Kimerling, J. (2001). "International standards in Ecuador's Amazon oil fields: the privatization of environmental law". *Columbia Journal Environmental Law*, N° 26, pp. 289-397.
- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo Cultura Económica.
- Lessmann, J., Fajardo, J., Muñoz, J. y Bonaccorso, E. (2016). "Large expansion of oil industry in the Ecuadorian Amazon: biodiversity vulnerability and conservation alternatives". *Ecology and Evolution*, N° 6, pp. 4997-5012.
- Machado Aráoz, H. (2014). *Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea*. Buenos Aires: Mardulce.
- McCracken, S. F., y Forstner, M. R. J. (2014). "Oil road effects on the anuran community of a high canopy tank bromeliad (*Aechmea zebрина*) in the upper Amazon Basin, Ecuador". *PLoS ONE* 9:e85470



- O'Rourke, D. y Connolly, S. (2003). "Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption". *Annual Review Environmental Resources*, N° 28, pp. 587-617.
- Orszulik, S. (2016). *Environmental technology in the oil industry*. Heidelberg: Springer.
- Ponce Muriel, A. (2014). *Minería moderna para el progreso de Colombia*. Bogotá: ANDI – Cámara Asomneros, Cámara Colombiana de Minería y Federación Nacional de Productores de Carbón.
- Roe, E. M. (1991). "Development narratives, or making the best of blueprint development". *World Development*, N° 19, pp. 287-300.
- (1994). *Narrative policy analysis. Theory and practice*. Durham: Duke University Press.
- Ruiz M., Vasquez, G. y Trujillo, W. (2017). *Mitos y verdades sobre los derrames de petróleo en el Perú*, Lima: IDL, Justicia Viva. Disponible en <http://www.justiciaviva.org.pe/new/mitos-y-verdades-sobre-los-derrames-de-petroleo-en-el-peru/>.
- Stone, D. A. (2012). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. New York: Norton.
- Tellkamp, M. P., Santander, T., Muñoz, I., Cupuerán, F.J., Onofa, A. y Granda, F. R. (2004). "Preliminary results about the short term impacts of the construction of the crude oil pipeline in Northwest Pichincha". *Lyonia*, N° 6, pp. 97-125.
- Vallejo, M.C., Larrea, C., Burbano, R. y Falconí, F. (2011). *La iniciativa Yasuní-ITT desde una perspectiva multicriterial*. Quito: PNUD y FAO.
- WCS (2006). "Efectos de las carreteras sobre la fauna silvestre en el Parque Nacional Yasuní". *Wildlife Conservation Society, Boletín*, Quito, N° 1, pp. 1-7.
- Wodak, R. (2016). "Argumentation, political". En G. Mazzoleni, K.G. Barnhurst, K. Ikeda, R.C.M. Maia y H. Wessler (ed.) *The International Encyclopedia of Political Communication*. West Sussex: Wiley Blackwell.
- Wojtanowicz, A.K. (2016). Environmental control technology for oilfield processes. En S. Orszulik (ed) *Environmental technology in the oil industry*. Heidelberg: Springer.